

Editorial

Fecha de recepción: Noviembre 23 de 2011

Fecha de aceptación: Diciembre 5 de 2011

“El desarrollo que se busca no se puede confundir con crecimiento ni con aumento de la producción, del ingreso o del consumo únicamente. El desarrollo integral, implica lo anterior, pero además, incluye el desarrollo de la persona, como ser social, histórico y cultural, lo cual exige un proceso de cambios mentales, institucionales y sociales que requieren necesariamente un grado de participación consciente, activa, dinámica, crítica y creativa. De lo contrario, no estaríamos apuntando hacia un cambio positivo sino más bien estaríamos reforzando un tipo de participación tradicional que ofrecen las masas populares cuando actúan como mero soporte al servicio de la actividad productiva, económica, social o política, mediante el desempeño de diferentes roles: mano de obra, contribuyentes, consumidores o electores”

MIGUEL ANTONIO RAMÓN MARTÍNEZ (1987)

Cada día cobra mayor interés en la opinión pública de los colombianos, el problema del acaparamiento de tierras y sus implicaciones en términos de legislación, soberanía alimentaria, territorialidad, fuentes hídricas y economía. El Estado colombiano tiene sus expectativas puestas en inversores extranjeros que utilicen territorios a gran escala para el desarrollo de sus negocios: biocombustibles, minería, petróleo, energía. En África, donde ya es un hecho el acaparamiento de tierras por empresas chinas, se ha encontrado una fuerte relación entre pérdida de acceso a la tierra y hambre. En Colombia, la cuestión está empezando a ser discutida por organizaciones campesinas, ONG defensoras de derechos humanos y universidades. En este orden de ideas, se resalta en esta editorial el esfuerzo de la Dirección de Investigaciones de la Universidad Libre Seccional Cali, que viene realizando una serie de eventos académicos que buscan advertir sobre el impacto de los megaproyectos en América Latina y en Colombia, donde el Estado tiene sus apuestas de desarrollo para los próximos 100 años.

Estas apuestas (por la concentración de la tierra y del capital en pocas manos) afectan la vida de los colombianos, pues insisten en profundizar las causas que generan crisis humanitaria, pobreza, inequidad, conflicto armado, ejecuciones extrajudiciales, crisis penitenciaria y carcelaria, degradación ambiental y pérdida de la biodiversidad. Las imágenes son desgarradoras: mujeres, niños, ancianos, y hombres (en su mayoría pescadores, campesinos, indígenas y afrodescendientes) son atacados brutalmente para

favorecer las concesiones mineras, petroleras, energéticas y de biocombustibles por todo el territorio. Lo que para el Estado colombiano es cuestión de inversión extranjera sana, que aporta capital, tecnología y empleo; para muchos colombianos que lo padecen es una pérdida de sus territorios, de sus relaciones con la naturaleza y de sus modos de vida. Según las organizaciones campesinas colombianas y las demandas que hacen al Estado colombiano, el acaparamiento de tierras no sólo es una realidad en África sino también en Colombia, donde Unidades Agrícolas Familiares (UAF), adjudicadas a campesinos por el INCORA (ahora INCODER), son apropiadas por empresas nacionales y multinacionales como el exsenador Habib Merheg, Mónica Semillas, Poligrow, Aceites Manuelita, la Fazenda y Falabella, que ya llevan acaparadas más de 150 mil hectáreas.

Frente a estas apuestas del Estado colombiano, las comunidades reclaman que la elección es por la vida como condición de posibilidad de afirmación y potenciación de formas inéditas de existir, es decir, de relacionarse con la naturaleza y, por ende, con el *lugar* y el *territorio*. Las comunidades y las organizaciones sociales concitan al Estado, a la sociedad y a la academia a construir estrategias ético-políticas para la defensa del territorio y la cultura.

REINALDO GIRALDO DÍAZ